

AUDITORÍA ELECTORAL

POR PABLO ABUNDIZ
@pabundiz21

Las elecciones presidenciales en Perú del pasado 12 de abril no resultaron en una segunda ronda de votaciones en la que los dos candidatos más votados se enfrentarían en un balotaje que diera claridad política, en cambio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aún no termina de escrutarse las actas, las sospechas de fraude aumentan y se acerca el límite impuesto por las autoridades jurídico-electorales para confirmar a los rivales presidenciales.

Al cierre de esta edición, la ONPE había revisado el 98.01 por ciento de las boletas electorales y con el 17.13 por ciento de los votos a su favor, Keiko Fujimori, de derecha, espera que el 1.98 por ciento de las actas que falta por revisar esclarezcan quién será su rival en la jornada del 7 de junio.

De entre la treintena de aspirantes a la Presidencia, solo dos se encuentran aún en la lucha: el candidato de izquierda Roberto Sánchez Palomino y el representante de la extrema derecha Bernardo López Aliaga, quien ante una desventaja de 25 mil votos ha lanzado acusaciones de fraude electoral y llamado al resto de las fuerzas políticas a desconocer las elecciones.

Si bien la jornada electoral presentó irregularidades al carecer del material electoral suficiente para garantizar el voto de decenas de miles de personas en la capital, los observadores internacionales, incluidos los enviados por la Unión Europea, aseguraron

En medio de unos comicios marcados por falta de material y acusaciones de fraude, las autoridades de Perú implementaron una revisión del proceso que pone en evidencia los límites y vicios del sistema político del país andino

en su momento que el proceso electoral se había llevado a cabo de forma limpia y segura.

No obstante, la tardanza de la ONPE ha generado críticas en gran parte de la población que ha obligado a su dirigente a renunciar a su cargo y a la organización a salir a defender los sistemas computacionales utilizados en el conteo.

De acuerdo con la ONPE, las críticas realizadas a su proceso vienen de un lugar de desconocimiento sobre la operación de sus sistemas informáticos, los cuales, asegura, fueron auditados por empresas internacionales, por lo que llamó a los partidos políticos que tuvieron acceso al sistema a explicar a la ciudadanía su funcionamiento en un intento por recuperar su confianza.

EL ARGUMENTO DE LA TRANSPARENCIA

Bajo el argumento de reforzar la transparencia e integridad de los procesos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) comenzó el pasado lunes una auditoría informática general y una revisión técnica del proceso electoral del 12 de abril. El JNE también señaló que la auditoría será acompañada por el Comité Académico de Expertos y Apo-

El hecho de que existan o vayan saliendo a la luz incidentes en los que hay actas olvidadas o extraviadas, coloca en duda todo el proceso institucional que le da credibilidad a los resultados”

Claudia Edith Serrano
FES Aragón, UNAM

yo, un grupo interdisciplinario compuesto por múltiples profesionales nacionales y extranjeros cuya independencia garantiza la imparcialidad de sus juicios y recomendaciones.

Las medidas tomadas por el JNE no obstaculizan el cómputo de los votos restantes y tampoco tienen la facultad de modificar el resultado de la elección; sin embargo, llegan en un contexto de desconfianza propiciado por los señalamientos de fraude esgrimidos por López Aliaga y magnificados por sectores empresariales.



Keiko Fujimori obtuvo el 17 por ciento de los votos y pasa a la segunda ronda para enfrentar a Roberto Sánchez Palomino o a Bernardo López Aliaga

riales que, aún sin clamar una estafa por parte del ONPE, exigen mayor claridad en los resultados.

Mientras López Aliaga exige a la ONPE no entregar los resultados finales hasta que se haya realizado la auditoría, Fujimori utilizó el sólido primer lugar que obtuvo desde el inicio del conteo para manifestar su respaldo a la auditoría ordenada por el JNE. Por su parte, el candidato de izquierda no ha emitido un posicionamiento hasta el momento, pero su partido afirma que es una pena que las autoridades hayan cedido ante las injurias de un partido inconforme, aunque aseguran no se oponen a medidas que generen confianza entre los electores.

La doctora Claudia Edith Serrano, latinoamericanista y profesora de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, señala que más allá del sospechoso las autoridades electorales se vieron rebasadas al intentar organizar una elección muy ambiciosa para la cual no contaban con la logística adecuada.

“El hecho de que existan o vayan saliendo a la luz incidentes en los que hay actas olvidadas o extraviadas, coloca en duda todo el proceso institucional que le da credibilidad a los resultados y esto no solo deteriora aún más la legitimidad que puedan llegar a tener quienes resulten ganadores sino también el conjunto de instituciones que sostiene el sistema político en Perú; esto con el riesgo de alejar cada vez más a la ciudadanía.

“Hablamos ya de un deterioro y que, a pesar de los cambios que se intentaron implementar para formar un Congreso bicameral, lo único que provocó fue un entorpecimiento de la política elec-

toral que no permitió concentrarse en el proceso presidencial y luego dar paso a toda la renovación”, afirma la especialista.

UN SISTEMA POLÍTICO SIN CREDIBILIDAD

En los últimos 10 años, Perú ha visto pasar ocho presidentes y durante estas elecciones más de 30 candidatos escribieron su nombre para ocupar el Ejecutivo Nacional; sin embargo, solo siete de ellos lograron superar el cinco por ciento de los votos e incluso Keiko Fujimori, quien cuenta con una amplia trayectoria y el respaldo de una de las fuerzas políticas más arraigadas del país, no logró superar los más de tres millones de votos nulos o en blanco contabilizado por el ONPE.

La doctora Serrano señala que sin importar el resultado de la auditoría, el desconcierto causado por la lentitud de las autoridades y las acusaciones de fraude cimentan el terreno para más inestabilidad en un sistema marcado por la fragmentación partidista y los actores políticos que superponen sus ambiciones personales y sus cuotas de poder al bienestar del Perú.

“Es una situación en la que hay una toma de las instituciones por parte de una clase política que ha perdido de vista para qué funciona un partido político en relación con la ciudadanía y los lineamientos más básicos por los que se volvieron funcionarios públicos, en caso de los que tiene un cargo; entonces, esa democracia representativa ya entró en un desgaste enorme en el que quienes sufren el mayor impacto son las personas de a pie que se ven limitadas por los mecanismos institucionales. Es un proceso tan viciado que ha sufrido y, desgraciadamente, puede seguir sometiendo al Perú a esta parálisis a cargo de la clase política”, finaliza la especialista.

